



Misión Permanente de España
ante las Organizaciones Internacionales
GINEBRA

OHCHR REGISTER

18 NOV 2009

Recipients: SPD
JC (Encl.)

PGO/MLB/Nº 391/2009

La Misión Permanente de España ante la Oficina de las Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales con sede en Ginebra saluda atentamente a la Secretaría General de las Naciones Unidas (Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos) y tiene el honor de adjuntar la contestación del Gobierno español a la opinión 17/2009 del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria.

La Misión Permanente de España agradece a la OACNUDH que haga llegar la citada contestación (junto con la traducción de cortesía al inglés de la misma) al Grupo de Trabajo y a sus Miembros y se asegure que exista un enlace web directo que permita conocer íntegramente la contestación de España. Si bien la opinión 17/2009 no se recoge en su integridad en el informe que el Grupo de Trabajo presentará en la Sesión del Consejo de Derechos Humanos del próximo mes de marzo, es deseo del Gobierno español que la respuesta adjunta sea accesible por un enlace web directamente desde el informe que presente el Grupo de Trabajo.

Asimismo, la Misión Permanente de España agradece cualquier otra medida que adopte la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (OACNUDH) para asegurar la publicidad y accesibilidad por el público a la respuesta adjunta.

La Misión Permanente de España aprovecha esta oportunidad para reiterar a la Secretaría General de las Naciones Unidas (Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos) el testimonio de su más distinguida consideración.



Ginebra, 17 de noviembre de 2009

Secretaría General de las Naciones Unidas
Oficina de la Alta Comisionada para los
Derechos Humanos
Palais Wilson
Ginebra

RESPUESTA DEL GOBIERNO ESPAÑOL A LA OPINIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE DETENCIÓN ARBITRARIA SOBRE CARMELO LANDA (Nº 17/2009), DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2009

El Gobierno de España quiere poner de manifiesto su total discrepancia con la Opinión N. 17/2009, que contiene valoraciones sesgadas, incorrectas y faltas de fundamentación jurídica.

El Grupo de Trabajo no ha valorado en igual medida las aportaciones realizadas por el denunciante ("la fuente") y por el Gobierno español. Concluye el Grupo de Trabajo que ninguna de las dos, denunciante y Gobierno, ha aportado ninguna prueba de sus afirmaciones. A falta de pruebas, el Grupo de Trabajo da por verosímiles las acusaciones de la parte denunciante. El Grupo de Trabajo no toma en consideración la cuantiosa información y las pruebas aportadas y llega, por ello, a unas conclusiones alejadas de la realidad de los hechos.

El Gobierno español se pregunta si todos los miembros del Grupo de Trabajo han podido acceder y valorar, entre el 21 de agosto (fecha de remisión de la documentación por el Gobierno de España) y el 4 de septiembre (fecha en que el Grupo de Trabajo adoptó la Opinión), toda la documentación ofrecida por España, en español, debidamente traducida a los idiomas de trabajo de NNUU.

El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad de Carmelo Landa "por ser manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique.

En la Resolución 1997/50, la entonces Comisión de Derechos Humanos consideraba (como orientación para los trabajos del Grupo de Trabajo), que la privación de libertad no se consideraba arbitraria si se daban varias condiciones: que fuese el resultado de una decisión de autoridad judicial nacional, que fuese acorde con la legislación nacional y que fuese acorde con los estándares internacionales de derechos humanos".

Como consta en la documentación remitida por el Gobierno de España, la privación de libertad de Carmelo Landa fue adoptada por autoridad judicial independiente, el Juzgado Central de Instrucción N. 5 de la Audiencia Nacional, sobre una resolución judicial motivada (Sumario 4/08) por presunta comisión de delito de integración en banda terrorista (artículo 515 del Código Penal) y conforme a las condiciones procesales establecidas en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

A este respecto se imponen dos reflexiones:

a. Con respecto a la naturaleza del órgano jurisdiccional nacional que emitió la base legal de la detención y posterior prisión provisional, el Grupo de Trabajo reitera la condición de jurisdicción ordinaria, de "imparcialidad, objetividad, transparencia, independencia y capacidad" de la que hace gala la Audiencia Nacional (párrafo 47), como órgano jurisdiccional nacional competente para, entre otros, los delitos de terrorismo. El Grupo de Trabajo desestima la denuncia de "la fuente" sobre la naturaleza excepcional de la Audiencia Nacional. El Gobierno español recuerda de nuevo la Resolución 1997/50 de la Comisión de Derechos Humanos que le indica "tener en cuenta, en particular, el principio de la independencia de la judicatura" al tratar la cuestión de la detención arbitraria.

b. Con respecto a la naturaleza del delito el Grupo de Trabajo ha pasado totalmente por alto las actuaciones judiciales remitidas al afirmar que "el único hecho que se imputa al Sr. Landa Mendibe es la presunta integración en la estructura y órganos directivos de la Mesa Nacional de Batasuna" (párrafo 50).

El Gobierno español no puede de ninguna manera admitir lo expresado por el Grupo de Trabajo en el párrafo 56 que afirma que "el único motivo de inculpación de esta persona es su sola militancia en el ilegalizado partido político Batasuna, un hecho que en sí mismo no es delito, sino el ejercicio de un derecho humano reconocido tanto en la Declaración Universal (artículos 19, 20 y 21), como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos – artículos 18, 19 y 22)".

Tampoco es admisible lo expresado en el párrafo 57, "Las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que declaran la ilegalidad de Batasuna no transforman a dicha organización, por sí misma, en una organización ilícita o delictiva. La militancia y la dirigencia de un partido político, legal o ilegal, son conductas legítimas y manifestaciones indiscutibles de la libertad de expresión y opinión, así como del derecho de asociación". Es decir, el que sus directivos o miembros deban ser considerados autores del delito de asociación ilícita o de pertenencia a banda terrorista.

Además de las sentencias de ilegalización de los máximos órganos jurisdiccionales españoles, existen diversas resoluciones judiciales de la Audiencia Nacional que suspenden cautelarmente las actividades de Batasuna (agosto de 2002 y abril de 2007) por la vinculación de Batasuna con la organización terrorista ETA. Ignora la Opinión que Batasuna ha sido declarada organización terrorista por la Unión Europea (Posición Común 931/2001 del Consejo). Es decir, la Opinión parece querer desconocer la naturaleza terrorista de la ilegalizada organización política Batasuna.

En el Sumario 4/2008 de 13 de febrero del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, que obra en poder del Grupo de Trabajo, por el que el juez competente decreta la prisión provisional de Carmelo Landa, se detallan los hechos que se le imputan (y que podrían ser constitutivos de delito): su acreditada pertenencia a la Mesa Nacional de Batasuna en condición de liderazgo, su condición de portavoz de la formación ilegalizada, la participación en manifestaciones prohibidas a favor de Batasuna, la documentación

aprehendida a ETA que detalla su labor en el brazo internacional de Batasuna... Hechos que podrían constituir una reiteración de lo ya imputado en el auto de procesamiento dictado en el Sumario 35/2002 del Juzgado Central de Instrucción (integración en organización terrorista). Como indica el citado Auto Judicial (4/08), "en el caso de Carmelo Landa resulta clara la permanencia en la actividad presuntamente delictiva por lo que en atención a la doctrina constitucional (STC 35/07 de 12 de febrero) procede decretar la prisión provisional sin posibilidad de fianza". La reiteración delictiva así como el riesgo de sustracción a la acción de la Justicia, justifican en el marco legal español y en la mayoría de los sistemas penales, exigencia de prisión.

Como recuerda la Audiencia Nacional en Auto de 28 de abril de 2007, por el que se suspende durante tres años todas las actividades orgánicas, públicas, privadas e institucionales de Batasuna, "cualquier imputado pueden participar en cualquier acto si no está auspiciado o convocado directa o indirectamente por alguna de las organizaciones suspendidas o declaradas ilícitas;... pero cuando así lo hacen, asumen conscientemente la seguridad de la prohibición del acto"

El Gobierno de España no comparte la Opinión del Grupo de Trabajo de que la "militancia en el ilegalizado partido político Batasuna sea el ejercicio de un derecho humano reconocido, y una conducta legítima de la libertad de expresión, de la libertad de reunión y de participación política consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

El Gobierno español considera oportuno reiterar las consideraciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo de 30 de junio de 2009, Batasuna contra España, ("la Corte") en apoyo de la decisión del Tribunal Supremo de ilegalizar Batasuna por ser un instrumento de una organización terrorista:

"Un partido político en el que sus responsables inciten al recurso a la violencia, o propongan un proyecto político que no respete las reglas de la democracia o que persiga su destrucción, así como despreciar los derechos y libertades que reconoce, no puede valerse de la protección de la Convención Europea de Derechos Humanos" (79)

"La Corte identifica elementos en el comportamiento de Batasuna que, de una parte favorecen un clima de confrontación social, y de otra que constituyen actividades en apoyo implícito al terrorismo de ETA. Y cita entre estas actividades, los eslóganes y expresiones pronunciadas en las manifestaciones convocadas por Batasuna ("la lucha es la sola vía", "vosotros los fascistas sois los verdaderos terroristas", "viva ETA militar"), el reconocimiento de los terroristas de ETA como ciudadanos de honor en los pueblos gobernados Batasuna....(actividades de las misma naturaleza están descritas como evidencia de la presunta integración en banda terrorista de Carmelo Landa en el Sumario judicial 4/2008). "En su conjunto, son comportamientos muy cercanos a un apoyo explícito a la violencia y la glorificación de personas realmente vinculadas al terrorismo...Por ello la Corte considera que los argumentos de los tribunales españoles han justificado de modo más que

suficiente que pueden provocar confrontaciones violentas en la sociedad y perturbar el orden público, como ya ha ocurrido en el pasado" (86).

"La Corte considera que los actos de los miembros de Batasuna deben ser analizados en su conjunto como formando parte de una estrategia para llevar a sus últimas consecuencias su proyecto político, contrario en su esencia a los principios democráticos garantizados por la Constitución española. Ello justifica su ilegalización por apoyar políticamente la acción de una organización terrorista para alcanzar fines que persiguen perturbar el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública. Por ello, frente al argumento esgrimido de que las manifestaciones y expresiones públicas de Batasuna deben ser consideradas una expresión de la libertad de expresión, la Corte considera que los métodos empleados no han respetado la legalidad de los medios para ejercitar este derecho ni son compatibles con los principios democráticos fundamentales" (87).

"La Corte considera el rechazo a condenar la violencia como una actitud de apoyo tácito al terrorismo, más aún en un contexto como el español, en el que la actividad terrorista persiste después de más de 30 años, y ha sido y es condenado por el conjunto de los demás partidos políticos" (88).

"La Corte, que se suma a los argumentos del TS y del TC, considera que los actos y los discursos que se imputan a Batasuna constituyen un conjunto que da una imagen nítida y clara de un modelo de sociedad concebido y fomentado por Batasuna y que está en contradicción con el concepto de sociedad democrática, por lo que la decisión de ilegalización es una necesidad social imperiosa" (91).

La Corte Europea de Derechos Humanos ratificó estos pronunciamientos, y avaló de modo firme y definitivo la ilegalización de Batasuna por sus vínculos con la organización terrorista ETA el 6 de noviembre, cuando el Colegio de cinco jueces de la Gran Cámara decidió no aceptar la demanda de Batasuna de revisión de la sentencia de 30 de junio.

Por ello el Gobierno español rechaza la Opinión en cuanto que la privación de libertad de Carmelo Landa resulte de un enjuiciamiento o condena por el ejercicio de derechos o libertades proclamados en la DUDHH y del Pacto (Categoría II).

Sobre las condiciones de la detención de Carmelo Landa, el Grupo de Trabajo afirma que las dos versiones, denunciante y Gobierno español, son incompatibles, y que en ningún caso ofrecen pruebas de las afirmaciones. Pese a ello, el Grupo de Trabajo considera que la versión del relato de la denuncia es más creíble que la respuesta del Gobierno español por dos hechos, que califica de "indesmentibles" (párrafo 44):

Ante las denuncias de torturas alegadas presuntamente por Carmelo Landa (y nunca probadas por el denunciante), o ante el mero hecho de que hubieran

podido existir esas torturas, el Estado español debió investigar esas alegaciones.

El Grupo reconoce que no existió tortura al haber prescindido la Opinión de imputar cualquier infracción de los artículos 5 y 7 de la DUDDHH, a la que sí hacía referencia en la comunicación inicial del Grupo al Gobierno español del 25 de mayo.

Si no ha habido tortura tampoco hay razones para investigar esas prácticas prohibidas. Además, del hipotético incumplimiento del deber de investigar torturas no se puede derivar la arbitrariedad de la detención.

El Grupo de Trabajo considera otro "hecho indesmentible", que la detención fue arbitraria por los largos y reiterados períodos de incomunicación a que fue sometido Carmelo Landa.

El Gobierno español lamenta que el Grupo de Trabajo parta de un error fundamental, que vicia su análisis: la confusión del régimen de incomunicación, del régimen de dispersión carcelaria y del régimen de sanciones penitenciarias bajo tutela judicial.

El ingreso en prisión de Carmelo Landa se produjo en régimen ordinario, aplicable a todos los supuestos de prisión provisional: "prisión comunicada". Los períodos de aislamiento a que fue sometido en prisión, lo fueron en aplicación del régimen ordinario penitenciario (Ley Orgánica de Régimen Penitenciario), sometido a supervisión del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

Como manifiesta el denunciante en el relato que recoge la Opinión, Carmelo Landa fue sancionado con fecha 02.09.08 con privación de paseos y actos recreativos como autor de falta grave, que por razones de seguridad y orden público se extendió a la suspensión de comunicaciones orales y especiales. Carmelo Landa presentó recurso de alzada contra esta decisión de la Comisión Disciplinaria del centro penitenciario. El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, en resolución de 17 de octubre de 2008, estimó parcialmente el recurso interpuesto y moderó la sanción. Carmelo Landa presentó un nuevo recurso de reforma el 11.11.08 contra el Auto mencionado, que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria desestimó el 05.03.09.

En último lugar, el Grupo de Trabajo considera que España ha cometido una serie de infracciones procesales graves (párrafo 58) al negar la existencia de comunicación alguna al Sr. Carmelo Landa en el momento de la detención.

En el Derecho español la detención que consiste en la aprehensión física del presunto delincuente sólo requiere de una orden judicial y de la mención del delito presuntamente cometido. En la detención no cabe ni fundamentación ni consideraciones acerca de la naturaleza jurídica de los hechos o de las circunstancias, si sobre la sujeción o exención de responsabilidades civiles o penales. No pueden ni deben hacerse tales consideraciones por la elemental razón de que no se ha oído al detenido por parte de quien debe tomar la

responsabilidad de decidir sobre su situación personal: el juez. Por el contrario, el Grupo de Trabajo considera que este análisis debe hacerse en el momento de la detención.

El Gobierno de España reitera que la norma española está en plena consonancia con el artículo 9.2 y con el artículo 14-3-a, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que distingue entre la información que se ha de facilitar a todo detenido "en el momento de la detención" que atañe a la expresión simple de las razones y la notificación de la acusación formulada, la cual se ha de practicar "sin demora" y que ha de contener una específica motivación.

Es por consiguiente en un momento posterior cuando procede ese análisis que la Opinión refiere al acto de la detención. En efecto, en el caso examinado, el Juzgado competente que había acordado la detención procedió a oír al imputado, dictando —como ya se ha mencionado— el Auto de Prisión el 13 de febrero de 2008, que contiene una amplia argumentación justificadora de la medida de prisión comunicada.

Como se indica en el Informe del Juez Instructor competente de la Audiencia Nacional, que obra en poder del Grupo de Trabajo, con todos sus anexos:

"El día 10 de febrero de 2008 se dictó auto por el que se ordenó, por Juez Competente, la detención de Carmelo Landa, la entrada y registro en su domicilio, autorizado por el juez que dirigió, sobre el lugar, todo el operativo... El registro se practicó con todos los requisitos exigidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal con notificación previa al interesado que en todo momento estuvo presente en la diligencia... Luego de su detención que se produjo inmediatamente antes del registro domiciliario, fue examinado por el médico forense que practicó su consulta tanto en San Sebastián como en Madrid, y le fue notificada la incomunicación por orden judicial. Así mismo fue ordenado, judicialmente su traslado a Madrid, a la sede del Juzgado Central de Instrucción N.5 para la continuación de las diligencias policiales y judiciales. El Sr. Landa, como cualquier persona detenida por orden judicial fue trasladado desde su domicilio hasta la Comisaría de Bilbao y desde ésta a un Centro policial de Madrid. Desde el momento de su detención hasta la puesta a disposición del juez en período legal (antes de las 72 horas desde la detención, conforme a artículo 17.2 de la Constitución española), se aplicó el Protocolo aplicado por el Juzgado Central de Instrucción N.5 sobre las personas detenidas por terrorismo. Las condiciones de detención, registro y permanencia en dependencias policiales se hicieron con control judicial y en condiciones de igualdad con los demás detenidos. La estancia de Carmelo Landa en el centro policial (comisaría general de información) fue normal y sin incidencias, recibiendo atención médica necesaria tanto por el médico forense como por el médico de confianza o, dándosele oportunidad de que también lo hiciera el médico de confianza. El día 13 la policía judicial procedió a tomarle declaración asistido de abogado, acogiéndose a su derecho a guardar silencio. El mismo día 13 compareció en plazo legal ante el Juzgado Central de Instrucción N.5 cuyo titular le tomó la oportuna declaración luego de serle comunicada la imputación. Se celebró la correspondiente comparecencia y se dictó auto de

prisión provisional por el presunto delito de integración en organización terrorista. El auto de procesamiento es de fecha 25 de enero de 2005. La comparecencia ante el Juez de Instrucción, como en todos los casos sin excepción, se produjo sin sujeción ni inmovilización (esposas o grilletes), asistido por abogado de su confianza, que se entrevistó posteriormente con él, siendo trasladado al Centro Penitenciario por orden judicial, en las mismas e idénticas condiciones que cualquier preso preventivo en España, cumpliendo los protocolos de seguridad ordinarios.”

En la causa contra Carmelo Landa existen abundantes indicios que avalan su procesamiento, lo que ha determinado que no sólo el Juzgado Central de Instrucción N.º 5 sino también la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional —es decir, dos órganos jurisdiccionales distintos— mantengan su situación de prisión provisional. La instrucción de esta causa ya está concluida y ahora es la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la competente para juzgarlo y la que debe adoptar las decisiones sobre la libertad provisional del acusado.

El Grupo de Trabajo censura que Carmelo Landa no haya gozado del derecho a la libertad durante el juicio, al considerar que éste nunca ha pretendido eludir la acción de la Justicia, y habla de la “denegación sistemática” de las solicitudes del preso de “libertad bajo fianza” (párrafo 18).

En el caso del Sr. Landa resulta clara su persistencia en el delito, por lo que en razón de la doctrina constitucional, como ya se ha mencionado (STC 35/2007 de 12 de febrero) procede modificar la situación y decretar la prisión provisional sin posibilidad de fianza.

El último de los capítulos de censura que la Opinión imputa al Estado español alude a no haber respetado el derecho a la presunción de inocencia, hecho que se configura con los tratos o penas crueles (párrafos 44 a 46), los que se produjeron desde el momento de la privación de libertad y su inmediata consideración como reo peligroso. Vuelve a hablar el Grupo de Trabajo de torturas o malos tratos. Sobre este extremo el Gobierno de España reitera lo dicho en párrafos precedentes.

EN CONCLUSIÓN, el Gobierno de España no considera que la prisión provisional decretada por los Tribunales para el Sr. Carmelo Landa suponga una violación alguna de la Declaración Universal de Derechos Humanos o del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por consiguiente no procede adoptar medida alguna de reparación a favor del Sr. Landa en cuanto que ninguna violación de sus derechos o libertades se ha producido como consecuencia de su detención, procesamiento y prisión provisional.

El Gobierno español vuelve a reiterar al Grupo de Trabajo que no le corresponde adoptar ninguna medida o instrucción al poder judicial sobre la puesta en libertad provisional de una persona en régimen de prisión provisional, como es el caso de Carmelo Landa, ni sobre el desarrollo del proceso judicial que está llevando a cabo la autoridad judicial competente. Lo contrario supondría una invasión del poder ejecutivo sobre las competencias del poder judicial (“independiente, responsable y

sometido únicamente al imperio de la ley” como lo define la Constitución española, artículo 117.1), impropio del Principio de División de Poderes que rige un Estado de Derecho.

RESPONSE OF THE SPANISH GOVERNMENT TO THE OPINION OF THE WORKING GROUP ON ARBITRARY DETENTION REGARDING CARMELO LANDA (No. 17/2009), OF 4 SEPTEMBER 2009

The Government of Spain would like to make clear its complete disagreement with Opinion No. 17/2009, which contains biased and incorrect assessments lacking legal basis.

The Working Group has not considered equally the arguments made by the complainant ("the source") and by the Spanish Government. The Working Group concludes that neither the complainant nor the Spanish Government has presented any evidence backing their affirmations. In the absence of such evidence, the Working Group considers the accusations of the complainant to be credible. The Working Group does not take into consideration the great deal of information and evidence presented, and therefore arrives at conclusions which are far from the truth of the matter.

The Spanish Government is unsure whether all of the members of the Working Group have been able to have access to and evaluate—between 21 August (the date when the Spanish Government sent its documentation) and 4 September (the date when the Working Group adopted the Opinion)—all of the documentation presented by Spain, in Spanish, duly translated into the UN working languages.

The Working Group considers Carmelo Landa's imprisonment to be arbitrary "because it is manifestly impossible to invoke any legal basis to justify it."

In Resolution 1997/50, what was then called the Commission on Human Rights considered that imprisonment would not be considered arbitrary if various conditions concurred: if it were the result of a decision by a national judicial authority, if it were in accordance with domestic law, and if it were in accordance with international human rights standards.

As demonstrated in the documentation presented by the Spanish Government, the imprisonment of Carmelo Landa was a decision adopted by an independent judicial authority, the Central Court of Criminal Investigation No. 5 of the National High Court, on the basis of a reasoned judicial resolution (Committal Proceedings 4/08), on the alleged offence of membership of a terrorist group (Article 515 of the Spanish Criminal Code), and pursuant to the procedural rules set forth in the International Covenant on Civil and Political Rights.

In this regard, two reflections are in order:

1. Regarding the nature of the domestic jurisdictional body whose decision formed the legal basis for the arrest and subsequent remanding in custody, the Working Group reaffirms the condition of ordinary jurisdiction, of "objectivity, transparency, independence and capacities" clearly shown by the National High

Court (Paragraph 47), as the competent national jurisdictional body for judging terrorism, among other offences. The Working Group dismisses "the source's" accusation regarding the exceptional nature of the National High Court. The Spanish Government again highlights the fact that Resolution 1997/50 of the Commission on Human Rights indicates that the principle of judicial independence should particularly be taken into account when dealing with the issue of arbitrary detention.

2. Regarding the nature of the offence, the Working Group has completely ignored the judicial proceedings presented in affirming that "the only action imputed to Mr Landa Mendibe is alleged membership in the structure and leadership bodies of Batasuna's National Committee" (paragraph 50).

The Spanish Government cannot by any means accept the Working Group's affirmation in Paragraph 56 that "the only motive for indictment of this individual is solely his activism in the banned political party Batasuna, a fact which is not in itself an offence, but rather the exercise of a human rights recognized both in the Universal Declaration (Articles 19, 20 and 21) and the International Covenant on Civil and Political Rights (Articles 18, 19 and 22)."

Likewise, the statement in paragraph 57 is also inadmissible: "The rulings of the Supreme Court and of the Constitutional Court which declare Batasuna illegal do not transform said organization, in itself, into an illicit or criminal organization. Activism and leadership in a political party—legal or illegal—are a legitimate conduct and indisputable manifestations of freedom of expression and opinion, as well as the right to assembly." In other words, the fact that its leaders or members should be considered the perpetrators of the offence of illicit association or membership in a terrorist group.

In addition to the decisions banning Batasuna handed down by the highest Spanish judicial authorities, there are different legal resolutions by the National High Court suspending provisionally Batasuna's activities (August 2002 and April 2007) due to its ties with the ETA terrorist organization. The Opinion obviates the fact that Batasuna has been declared a terrorist organization by the European Union (Common Position 931/2001 of the Council). In other words, the Opinion seems to want to ignore the terrorist nature of the banned political organization Batasuna.

Committal Proceedings 4/2008, of 13 February, of the Central Court of Criminal Investigation of the National High Court, in which the competent judge orders Carmelo Landa to be remanded in custody, of which the Working Group has a copy, details the acts of which he is accused (and which could constitute criminal offences): his proven membership as a leader of Batasuna's National Committee, his position as spokesperson of the banned organization, his participation in prohibited protest actions in favour of Batasuna, the documentation seized from ETA which details his work in Batasuna's international organization, etc. All of these actions could be considered a reiteration of what he had already been accused of in the indictment included in Committal Proceedings 34/2002 of the Central Court of Criminal Investigation (membership in a terrorist organization). As stated in the Decree remanding in

custody in the Committal Proceedings cited above (4/2008), "in the case of Carmelo Landa, his ongoing allegedly criminal activity is clear, and therefore in accordance with constitutional case law (STC 35/07 of 12 February), he is to be remanded in custody without possibility of bail." The repetition of these criminal actions, as well as the risk of absconding, justify within the Spanish legal system, and in that of the majority of criminal systems, the need for imprisonment.

As stated by the National High Court, in its Decree of 28 April 2007, by which it suspended, for three years, all of Batasuna's public, private, or institutional activities, "any accused person may participate in any act if it is not under the auspices or nor directly or indirectly organized by any of the suspended or banned organizations.... however, when they do so, they consciously assume the certainty that the action shall be prohibited."

The Government of Spain does not share the Working Group's Opinion that "activism in the banned political party Batasuna is the exercise of a recognized human right, and a legitimate manifestation of the freedom of speech, and freedom of assembly and of political participation enshrined in the Universal Declaration of Human Rights."

The Spanish Government considers it opportune to reiterate the statement by the European Court of Human Rights (hereinafter, "the Court") of 30 June 2009, regarding *Batasuna vs. Spain*, supporting the Spanish Supreme Court's decision to ban Batasuna for being the instrument of a terrorist organization:

"A political party whose leaders incite the use of violence or propose a political project that does not respect one or more of the rules of democracy or which seeks its destruction, as well as despising the rights and freedoms that democracy recognises, cannot enjoy the protection of the Convention" (79).

The Court identifies elements in Batasuna's behaviour which, on the one hand, promote a climate of social confrontation, and on the other, constitute activities that implicitly supports ETA terrorism; it cites, among these activities, the slogans and expressions used at demonstrations called by Batasuna ("fighting is the only way", "you fascists are the real terrorists", "long live *ETA militar*"); the recognition of ETA terrorists as honorary citizens of the municipalities governed by Batasuna, etc. (Similar activities are described as evidence of Carmelo Landa's alleged membership in the terrorist group, in Committal Proceedings 4/2008). "Taken as a whole, this type of conduct is very close to explicitly supporting violence, and to glorifying the individuals who are effectively linked to terrorism. Consequently, the Court considers that the arguments of the Spanish courts have provided more than sufficient evidence that they may provoke violent confrontations in society and disturb public order, as has already been the case in the past" (86).

"The Court considers that the acts of members of Batasuna are to be analysed as a whole, forming part of a strategy to take their political project to its ultimate consequences, contrary to the essence of the democratic principles guaranteed by the Spanish Constitution. This justifies its being declared illegal, since it

supports politically the action of a terrorist organisation in order to achieve aims directed at disrupting the constitutional order and the severely disturbing the public peace. Thus, in reply to the argument that Batasuna's public statements and expressions ought to be considered a form of freedom of expression, the Court considers that the methods used have neither respected the legality of means to exercise this right nor are they compatible with fundamental democratic principles" (87).

"The Court considers the refusal to condemn violence as an attitude of tacit support for terrorism, even more so in the context of Spain, where terrorist activity persists after more than thirty years and has been condemned and is condemned by the other political parties" (88).

"The Court, which takes on the arguments of both the Supreme and the Constitutional Courts, considers that the actions and speeches attributed to Batasuna constitute a whole which gives a clear and distinct image of the model of society conceived and furthered by Batasuna, and which clearly contradicts the concept of democratic society, so that this decision to declare it illegal is an imperative social need" (91).

The European Court of Human Rights ratified these statements, and firmly and definitively supported the banning of Batasuna because of its ties to the ETA terrorist organization on 6 November, when the panel of five judges of the Grand Chamber decided not to accept Batasuna's appeal for a review of the 30 June ruling.

Therefore, the Spanish Government rejects the Opinion insofar as its statement that the imprisonment of Carmelo Landa is the result of a legal decision or ruling for exercising rights or freedoms proclaimed in the Universal Declaration or the Covenant (Category II).

Regarding the conditions of the Carmelo Landa's detention, the Working Group affirms that the two versions--of the complainant and of the Spanish Government--are incompatible, and that neither party offers proof of its affirmations. Despite this, the Working Group considers the accusation's version to be more credible than the response of the Spanish Government, for two reasons, which it calls "undisputable" (paragraph 44):

Regarding the allegations of torture alleged by Carmelo Landa (and never proven by the complainant), or the mere fact that these tortures may have occurred, the Spanish State should investigate these allegations.

The Group recognizes the fact that there was no torture, since the Opinion dispenses with imputing any infraction of Articles 5 and 7 of the Universal Declaration, although it did refer to it in the initial communication that the Group sent the Spanish Government on 25 May.

If there were no torture, then neither is there any reason to investigate such prohibited practices. Moreover, the fact of an arbitrary detention cannot be derived from a hypothetical noncompliance with the duty to investigate torture.

The Working Group considers another "undisputable fact" that the detention was arbitrary because of the long and reiterated periods during which Carmelo Landa was held incommunicado.

The Spanish Government regrets that the Working Group bases this on a fundamental error, which distorts its analysis: confusing being held incommunicado with the system of *dispersión carcelaria* (the policy of dispersing terrorist suspects in various prisons) and with the system of prison penalties with judicial review.

Carmelo Landa was sent to prison under the ordinary system, applicable to all cases of pre-trial custody: *prisión comunicada* (i.e. ordinary, not incommunicado). The periods of isolation to which he was subjected in prison were in compliance with the ordinary prison regulations (Organic Law of the Prison System), under the supervision of the competent Judge.

As stated by the complainant in the account reflected in the Opinion, Carmelo Landa was sanctioned on 2 September 2008, being deprived of outdoor walks and recreation, due to having committed a serious infraction, which for reasons involving security and public order was extended to the suspension of verbal and special communications. Carmelo Landa appealed this decision of the prison's Disciplinary Committee. The Central Judge for Prison Supervision of the National High Court, in a resolution dated 17 October 2008, partially admitted this appeal and moderated the sanction. Carmelo Landa presented another appeal on 11 November 2008 against the aforesaid resolution, which the Judge for Prison Supervision rejected on 5 March 2009.

Lastly, the Working Group considers that Spain has committed a series of serious procedural infractions (Paragraph 58) by denying Mr Carmelo Landa any kind of communication at the time of his arrest.

Under Spanish Law, arrest which consists of the physical apprehension of the alleged criminal requires only a judicial order specifying the criminal offence allegedly committed. Arrest requires neither legal argument nor considerations regarding the legal nature of the facts or circumstances, nor regarding whether or not they are subject to civil or criminal liability. Such considerations neither can nor should be made due to the elementary reason that the arrested person has not yet been heard by the party who must take responsibility for the decision regarding his or her personal situation: the judge. On the contrary, the Working Group considers that this analysis should be carried out at the moment of arrest.

The Government of Spain reaffirms that Spanish Law is fully in accordance with Articles 9.2 and 14.3a of the International Covenant on Civil and Political Rights, which distinguishes between the information that must be provided to the detainee "at the time of arrest", which involves simply providing the reasons thereto and notification of the charges against him or her, which must be done "promptly" and must contain a specific motive.

It is, therefore, at a later time when this analysis, to which the Opinion refers regarding the act of arrest, is appropriate. Indeed, in the case under examination, the competent Court that had decided on the arrest then heard the accused, handing down—as stated above—the Remand Decree on 13 February 2008, which contains an extensive series of reasons of justifying the measure of ordinary (i.e. not incommunicado) imprisonment.

As indicated in the Report by the competent Investigating Magistrate of the National High Court, of which the Working Group has a copy, with all of its annexes:

“On 10 February 2008, a decree was issued in which the competent judge ordered the arrest of Carmelo Landa, and the forcible entry and search of his domicile, which was authorized by the judge who directed, on site, the entire operation. The search was carried out in compliance with all of the requirements set forth in the Criminal Judicial Procedure Act, after serving notice on the interested party, who was present at all times during the search. After his arrest, which took place immediately before the search, a forensic physician examined him, both in San Sebastian and in Madrid, and he was informed of his detention incommunicado by judicial order. Moreover, his removal to Madrid was ordered by the judge, and he was taken to the headquarters of the Central Court of Criminal Investigation No. 5 to continue with the police and judicial proceedings. Mr Landa, like any individual arrested by judicial order, was taken from his domicile to the Police Station of Bilbao, and from there to a police centre in Madrid. From the moment of his arrest until he was put at the disposal of the judge within the legal deadline (i.e. before 72 hours elapsed from the arrest, pursuant to article 17.2 of the Spanish Constitution), the protocol implemented by the Central Court of Criminal Investigation No. 5 to individuals arrested on a terrorist charge was applied. The arrest, search, and permanence within police offices were all under judicial control, and under conditions identical to those of other detainees. Carmelo Landa’s stay at the police centre (General Commissariat of Information) was normal and without incident, and he received the necessary medical attention, both from the forensic physician and his own doctor, or he was given the opportunity for his own doctor to provide such attention. On the 13th, the judicial police interrogated him, with the assistance of a solicitor, but he exercised his right to remain silent. That same day, within the legal deadline, he appeared before the Judge of the Central Court of Criminal Investigation No. 5, who duly questioned him after informing him of the charges against him. A hearing was duly held, and a decree remanding him in custody was handed down, charging him with the offence of belonging to a terrorist organization. The decree of indictment is dated 25 January 2005. The appearance before the Judge of Criminal Investigations took place, as in all cases without exception, without being tied or immobilized (e.g. with handcuffs or the like), with the assistance of a solicitor of his choice, who subsequently had a private meeting with him. He was later taken to prison by judicial order, in the same and identical conditions as any individual remanded in custody in Spain, complying with the standard security protocols.”

In the case against Carmelo Landa, there is a great deal of evidence to back up his indictment, which was the determining factor behind the fact that not only Central Court of First Instance No. 5, but also the Criminal Chamber of the National High Court, i.e. two different legal bodies, maintained his situation of pre-trial custody. The committal proceedings in this case have already concluded, and now the National High Court's Criminal Court is the competent body for the trial, and which is to make the decision regarding the accused's release pending trial.

The Working Group criticizes the fact that Carmelo Landa has not enjoyed the right to freedom during the trial, claiming that he has never aimed to abscond from justice, and refers to a "systematic denial" of the prisoner's requests for "release on bail" (paragraph 18).

In the case of Mr Landa, his reiterated criminal offences are clear, and therefore constitutional case law, as mentioned above (STC 35/2007 of 12 February), justifies modifying his situation and to order his pre-trial custody without bail.

The last in the Opinion's series of criticisms of the Spanish State alleges that the right to presumption of innocence was not respected, a fact which is related to cruel treatment or punishment (Paragraphs 44 to 46), which allegedly occurred from the time of arrest, and his immediate consideration as a dangerous prisoner. Again, the Working Group refers to torture or ill treatment. Regarding this allegation, the Government of Spain reaffirms its statements from previous paragraphs.

IN CONCLUSION, the Government of Spain does not consider that the pre-trial custody ordered by the Courts in the case of Mr Carmelo Landa involves any violation whatsoever of the Universal Declaration of Human Rights or the International Covenant on Civil and Political Rights. Therefore, it would be inappropriate to adopt any measure of compensation whatsoever in favour of Mr. Landa, insofar as there has been no violation of his rights or freedoms as a consequence of his arrest, indictment and pre-trial custody.

The Spanish Government reiterates to the Working Group the fact that it cannot adopt any measure or transmit any instruction to the judicial authorities regarding the provisional release of a person who is remanded in custody – as is the case of Carmelo Landa – nor may it influence the development of the legal process being applied by the competent judicial authority. Such an action would constitute an intromission by the Executive into the competences of the Judiciary (which is "independent, responsible and subject solely to the rule of law" as defined in the Spanish Constitution, Article 117.1), and would contravene the Principle of the Division of Powers that must prevail under the Rule of Law.